

## EDJ 2004/156540

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, S 16-11-2004, nº 4143/2002

### Bibliografía

- Comentada en "Derecho al silencio: el ruido en una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos"
- Comentada en "Las inmisiones dañosas en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 31 de mayo de 2007"
- Comentada en "La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por el ruido"

Tema novedoso o poco frecuente

## Resumen

*En el caso Moreno Gómez vs. España el TEDH concluye que el Estado demandando no ha cumplido la obligación positiva de garantizar el derecho de la demandante al respeto de su domicilio y de su vida privada, vulnerando el art. 8 de la Convención.*

### NORMATIVA ESTUDIADA

Conv. de 4 noviembre 1950. Convenio Europeo para la Protección Derechos Humanos y Libertades Fundamentales  
art.8 , art.27.1 , art.34 , art.41 , art.44.2

### CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

DERECHO AL RESPETO DE LA VIDA FAMILIAR  
DERECHO AL RESPETO DE LA VIDA PRIVADA  
DERECHO AL RESPETO DEL DOMICILIO

### FICHA TÉCNICA

Procedimiento:Procedimiento ante el TEDH

#### Legislación

Aplica art.8, art.27.1, art.34, art.41, art.44.2 de Conv. de 4 noviembre 1950. Convenio Europeo para la Protección Derechos Humanos y Libertades Fundamentales

#### Jurisprudencia

Citada en el mismo sentido sobre ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS - CONTROL - Medidas correctoras - Ruidos, DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL, DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - ÁMBITO Y ALCANCE - Vulneración por STSJ Cantabria Sala de lo Contencioso-Administrativo de 10 octubre 2005 (J2005/179133)

Citada en el mismo sentido por SAN Sala de lo Contencioso-Administrativo de 10 junio 2005 (J2005/190208)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 27 enero 2005 (J2005/19501)

Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO por STSJ País Vasco Sala de lo Contencioso-Administrativo de 22 septiembre 2005 (J2005/212220)

Citada en el mismo sentido por SAP Pontevedra de 21 junio 2005 (J2005/277643)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 17 octubre 2005 (J2005/291738)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 22 diciembre 2005 (J2005/302908)

Citada en el mismo sentido por SAP Zaragoza de 10 mayo 2005 (J2005/54609)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 2 marzo 2005 (J2005/70304)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 7 abril 2006 (J2006/286203)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 8 mayo 2006 (J2006/297073)

Citada en el mismo sentido por SAP Zaragoza de 17 mayo 2006 (J2006/305997)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 2ª de 19 octubre 2006 (J2006/311726)

Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 31 enero 2006 (J2006/389567)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 17 julio 2006 (J2006/415376)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 5 septiembre 2006 (J2006/415579)

Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 17 octubre 2006 (J2006/465146)

Citada en el mismo sentido por SAP Soria de 14 marzo 2007 (J2007/125222)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 3ª de 26 noviembre 2007 (J2007/243287)

Citada en el mismo sentido por SAP Las Palmas de 5 noviembre 2007 (J2007/296479)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 11 abril 2007 (J2007/313407)

Citada en el mismo sentido por SAP Jaén de 24 octubre 2007 (J2007/354406)

Citada en el mismo sentido por STSJ Canarias (SCr) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 26 enero 2007 (J2007/55518)

Citada en el mismo sentido por SAP Zaragoza de 23 enero 2007 (J2007/6148)

Citada en el mismo sentido sobre INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS - DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN - Importe de la indemnización por STS Sala 1ª de 31 mayo 2007 (J2007/68123)

Citada en el mismo sentido por STSJ Canarias (sede Santa Cruz) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 26 enero 2007 (J2007/7971)

Citada en el mismo sentido por SAP Cádiz de 23 mayo 2008 (J2008/120151)

Citada en el mismo sentido por SAP Asturias de 26 mayo 2008 (J2008/193241)

Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - DERECHOS DE LA PERSONALIDAD - Intimidad personal y familiar por STS Sala 3ª de 13 octubre 2008 (J2008/197142)

Citada en el mismo sentido por STSJ Cataluña Sala de lo Contencioso-Administrativo de 15 septiembre 2008 (J2008/240964)

Citada en el mismo sentido por STSJ Andalucía (Mál) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 15 julio 2008 (J2008/242633)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 19 febrero 2008 (J2008/28394)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 14 noviembre 2008 (J2008/338281)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 22 diciembre 2008 (J2008/338477)

Citada en el mismo sentido por STSJ Cast-León (Vall) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 29 diciembre 2008 (J2008/365336)

Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 25 noviembre 2008 (J2008/376694)

Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 16 octubre 2008 (J2008/383411)

Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 30 octubre 2008 (J2008/383429)

Citada en el mismo sentido por SJdo. Cont-Advo. de 26 mayo 2008 (J2008/81077)

Citada en el mismo sentido por STSJ Andalucía (Sev) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 9 febrero 2009 (J2009/109187)

Citada en el mismo sentido por STSJ Navarra Sala de lo Contencioso-Administrativo de 19 mayo 2009 (J2009/111455)

Citada en el mismo sentido por SJdo. Cont-Advo. de 31 julio 2009 (J2009/183796)

Citada en el mismo sentido por STSJ Cast-León (Vall) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 22 diciembre 2009 (J2009/355076)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 11 diciembre 2009 (J2009/366025)

Citada en el mismo sentido por SAP La Coruña de 13 marzo 2009 (J2009/57304)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 10 marzo 2010 (J2010/106998)

Citada en el mismo sentido por SAP Baleares de 28 octubre 2010 (J2010/280124)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 30 julio 2010 (J2010/287883)

Citada en el mismo sentido por SAP Zaragoza de 11 febrero 2011 (J2011/126614)

Citada en el mismo sentido por STSJ Cast-La Mancha Sala de lo Contencioso-Administrativo de 10 enero 2011 (J2011/18669)

Citada en el mismo sentido sobre CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 - ÓRGANOS CONSTITUCIONALES - Tribunal Constitucional - PROCESOS CONSTITUCIONALES - Recurso de amparo - Derecho Fundamental alegado - Intimidad e inviolabilidad por STC Pleno de 29 septiembre 2011 (J2011/226203)

Citada en el mismo sentido por SAP Santa Cruz de 15 septiembre 2011 (J2011/273652)

Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 20 octubre 2011 (J2011/285694)

Citada en el mismo sentido por STSJ Aragón Sala de lo Contencioso-Administrativo de 17 octubre 2011 (J2011/286475)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 3ª de 7 diciembre 2011 (J2011/292784)

Citada en el mismo sentido por SAP Barcelona de 22 diciembre 2011 (J2011/356237)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 3ª de 15 abril 2011 (J2011/51476)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 28 enero 2011 (J2011/56034)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 21 enero 2011 (J2011/56067)

Citada en el mismo sentido por STSJ Galicia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 10 marzo 2011 (J2011/69728)

Citada en el mismo sentido por STSJ Baleares Sala de lo Contencioso-Administrativo de 28 abril 2011 (J2011/76564)

Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 1 marzo 2012 (J2012/120126)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 3ª de 11 octubre 2012 (J2012/225258)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 5 marzo 2012 (J2012/36886)

Cita STEDH de 19 febrero 1998 (J1998/2076)

Cita STEDH de 22 octubre 1996 (J1996/12128)

Cita STEDH de 31 octubre 1995 (J1995/11141)

Cita STEDH de 9 diciembre 1994 (J1994/13609)

Cita STEDH de 21 febrero 1990 (J1990/12354)

## Bibliografía

Comentada en "Contaminación acústica y pasividad municipal: comentario a la STEDH de 16 noviembre 2004, condenatoria contra España"

Comentada en "Comentario a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de noviembre de 2004 (asunto Moreno Gómez c. España)"

Comentada en "Derecho al silencio: el ruido en una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos"

Comentada en "Las inmisiones dañosas en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 31 de mayo de 2007"

Comentada en "La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por el ruido"

Citada en "El "caso Barajas", la eficacia del derecho a la intimidad domiciliaria frente a la contaminación"

Citada en "El ruido en la jurisprudencia. Respuesta de los tribunales"

Citada en "Estatuto jurídico básico del individuo y urbanismo. Foro abierto"

Citada en "¿Cual es el grado de tolerancia que permite la disposición adicional décima de la Ley del Ruido en materia de inmisiones sonoras? Foro abierto"

Citada en "La contaminación acústica generada por el tráfico aéreo de Barajas en un polémico fallo del Tribunal Supremo"

Citada en "La protección civil respecto a los excesos del ruido"

**Sinópsis** *Hechos - La demandante, Pilar Moreno Gómez, vive desde 1970 en un piso de un barrio residencial de Valencia. A partir de 1974 el Ayuntamiento de Valencia concedió varias licencias que permitieron la apertura de bares, pubs y discotecas en la vecindad del domicilio de la demandante, locales que han impedido que los residentes pudieran dormir. Los vecinos comenzaron a denunciar, en primer lugar, actos de vandalismo y ruido. A la vista de los problemas causados por el ruido, el Ayuntamiento de Valencia decidió el 22 de diciembre de 1983 no conceder más licencias para la apertura de discotecas en la zona. Sin embargo esta decisión no se cumplió y se concedieron nuevas licencias. En 1993 el Ayuntamiento encargó un informe técnico según el cual el nivel de ruido era inaceptable y sobrepasaba los niveles permitidos. Los sábados a las 3:35 a.m. el ruido sobrepasaba los 100 decibelios (en una escala de 101 a 115.9 decibelios). La policía, en un informe de 31 de enero de 1995, comunica al ayuntamiento que los clubs nocturnos y discotecas del sector en que residía la demandante no cerraban sistemáticamente a su hora. El informe confirmaba que las quejas de los vecinos eran fundadas. El 28 de junio de 1996 el Ayuntamiento aprobó una nueva normativa sobre ruido y vibraciones publicada el 23 de julio de 1996. Según la nueva normativa los ruidos en áreas residenciales como en la que vivía la demandante, el ruido exterior no debía superar los 45 decibelios entre las 10 p.m. y las 8 a.m. Asimismo, definía ciertas zonas como acústicamente saturadas en las que se prohibían nuevas actividades como la apertura de clubs nocturnos y discotecas. El 27 enero 1997 el Ayuntamiento declaró la zona en que residía la demandante como zona acústicamente saturada. Sin embargo, el 30 enero 1997, el Ayuntamiento concedió una licencia para la apertura de una discoteca en el edificio en que vivía la demandante. Dicha licencia fue declarada nula por sentencia del Tribunal Supremo el 17 octubre 2001. La demandante, cansada de la situación y exasperada por la falta de sueño y descanso que le habían causado insomnio y otros problemas de salud, reclamó al Ayuntamiento de Valencia el 21 agosto 1997 por los daños sufridos y el coste de las ventanas dobles, alegando la vulneración del derecho a la vida y a la integridad física (art. 15) y del derecho a la vida privada y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18,2). Al no recibir respuesta alguna de las autoridades, y de acuerdo con la Ley de Protección de los Derechos Fundamentales (Ley 62/1978), la demandante acudió al Tribunal Superior de Justicia de Valencia el 25 noviembre 1997, alegando la violación de los art. 15 y 18,2 de la Constitución. El 21 Julio de 1998, el TSJ de Valencia desestimó la demanda ya que las mediciones de ruido tuvieron lugar en el recibidor del edificio en que vivía la demandante, no en su piso y por tanto no se podía considerar que se hubieran violado los art. 15 y 18,2; asimismo, entendía que el certificado médico de la demandante establecía solamente que ésta llevaba varios años bajo tratamiento por insomnio, pero no indicaba las causas del insomnio ni la duración del tratamiento. El 9 octubre 1998 la demandante interpuso recurso de amparo ante el TC. Invocando los art. 14 (igualdad) y 24 (derecho a un juicio justo) CE, alegó que el TSJ no había fundamentado su sentencia suficientemente, ni había valorado las pruebas presentadas. Invocaba los arts. 15 y 18,2 CE y la violación de su derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la vida privada y la inviolabilidad del domicilio.*

*El TC concluyó respecto a la violación de los arts. 14 y 24 CE, que carecía de competencia para sustituir al tribunal superior de justicia en la valoración de las pruebas. Y respecto a la falta de fundamento de la sentencia, el TC concluyó que la resolución del TSJ no podía considerarse arbitraria o irrazonable. Además señaló que la demandante no había identificado las decisiones que alegaba ser discriminatorias. Por lo tanto no había prueba de que se hubieran vulnerado los arts. 14 y 24 CE. Respecto a la supuesta violación de los artículos 15 (derechos a la vida y a la integridad física) y 18, 2 (derechos a la vida privada y a la inviolabilidad del domicilio) CE, el TC hizo referencia a las resoluciones del TEDH en las que queda establecido que, en casos de excepcional gravedad, los daños reiterados contra el medio ambiente podían infringir el derecho al respeto de la vida privada y familiar protegidos por el art. 8,1, incluso aunque no pusiera en peligro la salud. A pesar de ellos, el TC falló que solamente existe violación del art. 15 si el nivel de saturación acústica al que está expuesta una persona, como resultado de la acción u omisión de las autoridades públicas, causa daños graves e inmediatos en su salud. El TC entendió que la demandante no había demostrado el vínculo causal directo entre el ruido y los daños que alegaba. En relación con el art. 18 CE, concluyó que tampoco había demostrado la existencia de una molestia en su domicilio que constituyera la infracción del precepto constitucional. El TC desestimó el recurso de amparo porque la demandante no probó que el TSJ hubiera infringido sus derechos fundamentales. La sentencia se acompañó de dos votos discrepantes de dos jueces. El primero entendía que el fallo restringía el libre desarrollo de la personalidad al domicilio, y consideraba que las condiciones que se exigían en este caso para probar la violación de un derecho fundamental eran poco razonables, añadiendo que defendía la necesidad de hablar de una triple de protección constitucional, que se extendía desde el derecho a la vida y a la integridad física (art. 15), hasta el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo personal (art. 45,1), a través del derecho a la vida privada en el domicilio (art. 18,2). De acuerdo con el segundo juez, existía un problema preliminar que no se había examinado adecuadamente: el grado en que la autoridad competente debía garantizar la protección en cuestión. Los límites de tal obligación son un requisito necesario para determinar si hubo o no vínculo causal entre la supuesta inactividad de la autoridad y la supuesta violación. Las autoridades estaban obligadas a actuar cuando la vulneración de los derechos fundamentales alcanzaba cierta gravedad.*

*Sobre el art. 8 - La demandante denuncia el ruido y las molestias causadas por los clubs nocturnos de su lugar de residencia y alega que las autoridades son responsables del exceso de ruido que supone la vulneración de su derecho al respeto de su domicilio, protegido por el art. 8. El art. 8 garantiza el derecho a la vida familiar sin que las autoridades públicas puedan interferir en el ejercicio de tal derecho salvo en lo previsto por la ley, y siempre que sea necesario en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del bienestar económico del país, o para la prevención del crimen, la protección del orden, de la salud o de la moral así como de los derechos y libertades de los demás. La demandante denuncia la inacción de las autoridades locales de Valencia,*

y en particular, del ayuntamiento, que no han puesto término a las molestias nocturnas. En primer lugar, aunque el Ayuntamiento de Valencia no fuera la fuente directa de polución acústica, sí era responsable de haber causado la saturación acústica denunciada al conceder un número ilimitado de licencias sin tomar las medidas para cumplir la ley. La demandante invoca los principios establecidos en el caso de López Ostra vs. España sobre los efectos de la polución en el exterior del domicilio. El Gobierno alega que el ruido a que se refiere la demandante procedía de actividades privadas y que por tanto no había injerencia alguna de las autoridades en su derecho a la vida privada y al respeto de su vida familiar. Añade que el Ayuntamiento de Valencia había tomado varias medidas para poner término al problema de la contaminación acústica en la zona de residencia de la demandante, que habían demostrado ser suficientes para remediar la situación. Además alega que de acuerdo con las resoluciones judiciales anteriores, la demandante no había logrado demostrar que su domicilio estuviera expuesto al ruido nocturno y que, en todo caso, el art. 8 se aplicaba solamente al hogar y no se podía aplicar cuando la fuente de molestia era exterior. El TEDH recuerda los principios generales del art. 8, artículo que protege el derecho al respeto de la vida privada y familiar, así como el respeto del domicilio y de la correspondencia. Considerándose que el hogar es el lugar en que se desarrolla la vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho al respeto de su hogar, que incluye no solamente un espacio físico concreto sino también al disfrute tranquilo de esa zona. La infracción del derecho al domicilio no se limita a violaciones físicas, como pueden ser la entrada sin autorización en una casa, sino que incluye intrusiones que no son físicas como el ruido, emisiones, olores y otras formas de injerencia (Hatton y Otros vs. Reino Unido). En el caso de López Ostra vs. España, relativo a la contaminación acústica y a una planta de tratamiento de residuos, el TEDH concluyó que la contaminación ambiental grave puede afectar al bienestar de la persona e impedir que disfruten de sus domicilios hasta el punto de afectar negativamente a su vida privada y familiar, aunque no ponga en peligro su salud. En el caso Guerra y Otros vs. Italia el TEDH también observó que los efectos directos de las emisiones tóxicas sobre el derecho de los demandantes al respeto de sus vidas privadas y familiares significa la aplicabilidad del art. 8. A pesar de que, en esencia, el objeto del art. 8 es proteger a la persona contra la injerencia arbitraria de las autoridades públicas, este artículo puede comprender también el que las autoridades adopten medidas que protejan el respeto a la vida privada incluso en la esfera de las relaciones entre particulares (Stubbings y Otros vs. Reino Unido; y Surugiu vs. Rumania). Independientemente de que se analice el caso en términos de la obligación positiva del estado a la hora de adoptar medidas de protección de los derechos recogidos por el art. 8,1, o en términos de una injerencia por parte de una autoridad pública que debe justificarse de acuerdo con el art. 8,2, los principios aplicables son muy similares. En ambos contextos debe considerarse el justo equilibrio entre el interés del individuo y de la comunidad en su conjunto. El presente caso no se refiere a la injerencia de las autoridades públicas con el derecho al respeto del domicilio, sino a su inactividad a la hora de poner término a las infracciones de terceros. El TEDH señala que la demandante vive en una zona sujeta a molestias nocturnas que interfieren con su vida diaria, especialmente durante los fines de semana; el TEDH debe determinar si tales molestias causadas por el ruido revestían el nivel mínimo de gravedad necesario para que constituyan una violación del art. 8. El Gobierno alega que los tribunales nacionales concluyeron que la demandante no consiguió demostrar los niveles de ruido dentro de su domicilio. El TEDH considera que sería indebidamente formalista exigir tal prueba en un caso como éste, puesto que las autoridades municipales ya habían calificado la zona en cuestión como zona acústicamente saturada, lo cual significa, de acuerdo con normativa de 1986, que los vecinos están expuestos a altos niveles de ruido que les causan serias molestias. Además, el hecho de que los niveles máximos de ruido fueran excesivos se confirmó en varias ocasiones por el personal del Ayuntamiento. De manera que no parece que sea necesario exigirle a una persona que vive en una zona acústicamente saturada que demuestre lo que ya sabía oficialmente la autoridad municipal. El TEDH concluye que se han infringido los derechos protegidos pro el art. 8. A pesar de que el Ayuntamiento de Valencia adoptara las medidas necesarias que, en principio, habrían sido suficientes para proteger el respeto de los derechos protegidos, también toleró, contribuyendo con ello, a la violación de las normas que él mismo había elaborado. La regulación protectora de los derechos sirve de poco si no se hace respetar debidamente y el TEDH debe por ello reiterar que la finalidad de la Convención es la protección de derechos efectivos y no ilusorios. Los hechos demuestran que la demandante sufrió la grave vulneración de su derecho al respeto de su domicilio como consecuencia de la falta de acción de las autoridades para solucionar las molestias del ruido nocturno. En tales circunstancias, el TEDH concluye que el Estado demandando no ha cumplido la obligación positiva de garantizar el derecho de la demandante al respeto de su domicilio y de su vida privada, vulnerando el art. 8 de la Convención. Sobre el art. 41 - El TEDH concluye que existe un vínculo causal entre la violación de la Convención y el daño material alegado (el coste de las dobles ventanas). Y concede la cantidad 3.884 € en conjunto por los daños materiales y morales sufridos por la demandante. También concede el reembolso de los gastos y costas del proceso.

VERSION OFICIAL EN INGLÉS

## SENTENCIA

CASE OF MORENO GÓMEZ v. SPAIN

(Application no. 4143/02)

JUDGMENT

STRASBOURG

16 November 2004

This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention EDL 1979/3822 . It may be subject to editorial revision.

In the case of Moreno Gómez v. Spain,

The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a Chamber composed of:

Sir Nicolas Bratza, President,  
Mr M. Pellonpää,  
Mr J. Casadevall,  
Mr S. Pavlovschi,  
Mr J. Borrego Borrego,  
Mrs E. Fura-Sandström,  
Ms L. Mijovic, judges,  
and Mr M. O'Boyle, Section Registrar,

Having deliberated in private on 29 June and 26 October 2004,

Delivers the following judgment, which was adopted on the lastmentioned date:

#### PROCEDURE

1. The case originated in an application (no. 4143/02) against the Kingdom of Spain lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention") EDL 1979/3822 by a Spanish national, Ms Pilar Moreno Gómez ("the applicant"), on 22 November 2001.

2. The applicant was represented by Mr Andrés Morey Navarro, of the Valencia Bar. The Spanish Government ("the Government") were represented by Mr Ignacio Blasco Lozano, Agent of the Government and Head of the Legal Department of the Human-Rights Office at the Ministry of Justice.

3. The applicant alleged a breach of her right to respect for her home, contrary to Article 8 of the Convention EDL 1979/3822 .

4. The application was allocated to the Fourth Section of the Court (Rule 52 § 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 § 1 of the Convention EDL 1979/3822 ) was constituted as provided in Rule 26 § 1 of the Rules of Court.

5. By a decision of 29 June 2004 the Chamber declared the application admissible.

6. The applicant and the Government each filed observations on the merits (Rule 59 § 1).

7. On 14 September 2004 the applicant, but not the Government, lodged a written reply to the Government's observations. She also set out her claim for just satisfaction.

#### THE FACTS

##### I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

8. The applicant was born in 1948 and lives in Valencia.

##### A. Background to the case

9. The applicant has lived in a flat in a residential quarter of Valencia since 1970.

10. Since 1974 the Valencia City Council has allowed licensed premises such as bars, pubs and discotheques to open in the vicinity of her home, making it impossible for people living in the area to sleep.

11. Local residents first complained about vandalism and noise in the locality before 1980.

12. In view of the problems caused by the noise, the Valencia City Council resolved on 22 December 1983 not to permit any more night clubs to open in the area. However, the resolution was never implemented and new licences were granted.

13. In 1993 the City Council commissioned a report by an expert. The expert found that the noise levels were unacceptable and exceeded permitted levels. At 3.35 a.m. on Saturdays they were in excess of 100 dBA Leq (decibels), ranging from 101 to 115.9 dBA Leq.

14. In a report of 31 January 1995 the police informed the Valencia City Council that nightclubs and discotheques in the sector in which the applicant lived did not systematically close on time. They said that they were able to confirm that the local residents' complaints were founded.

15. On 28 June 1996 the City Council approved a new bylaw on noise and vibrations, which was published on 23 July 1996 in the Official Gazette of Valencia province. Article 8 of the bylaw lays down that in a family residential area (such as the one in which the applicant lives) external noise levels were not to exceed 45 dBA Leq between 10 p.m. and 8 a.m. Article 30 of the bylaw defines "acoustically saturated zones" as areas in which the large number of establishments, activity of the people frequenting them and passing traffic expose local residents to high noise levels and cause them serious disturbance.

16. Lastly, the bylaw specified the conditions that had to be satisfied for an area to be designated an "acoustically saturated zone" (zona acústicamente saturada) and the consequences of designation, which included a ban on new activities (such as nightclubs and discotheques) that led to acoustic saturation.

17. Following a resolution of the Valencia City Council sitting in plenary session on 27 December 1996, which was published in the Official Gazette of the Valencia province on 27 January 1997, the area in which the applicant lived was designated an acoustically saturated zone.

18. However, on 30 January 1997 the City Council granted a licence for a discotheque to be opened in the building she lived in. The licence was subsequently declared invalid by a judgment of the Supreme Court of 17 October 2001.

19. In order to determine whether the area should be designated an acoustically saturated zone, the City Council took various sound-level readings to monitor acoustic pollution there. In each of its reports the City Council laboratory indicated that the noise levels exceeded those permitted by the bylaw.

#### B. Court proceedings

20. The applicant was exasperated by the situation, which prevented her from sleeping and resting and caused her insomnia and serious health problems. On 21 August 1997 she lodged a preliminary claim with the Valencia City Council in which she relied on Article 15 (right to life and to physical integrity) and Article 18 § 2 (right to the privacy and inviolability of the home). She sought 3,907 euros (650,000 pesetas) for the damage she had sustained and the cost of installing double glazing.

21. Having received no reply from the authorities and in accordance with the Fundamental Rights (Protection) Act (Law no. 62/1978), the applicant lodged an application for judicial review with the Valencia High Court of Justice on 25 November 1997, alleging a violation of Articles 15 and 18 § 2 of the Constitution.

22. On 2 October 1997 the Valencia City Council lodged its written observations. It submitted that the application was premature and should be declared inadmissible, as the Council could still find a solution. This preliminary objection was dismissed in a decision of 27 October 1997.

23. On 11 December 1997 the representative of state council's office argued that the court should find in favour of the applicant. He considered that there had been a violation of Articles 15 and 18 § 2 of the Constitution and that the applicant's claim for damages was justified.

24. In a judgment of 21 July 1998, delivered after an adversarial hearing in public, the Valencia High Court of Justice dismissed the application for judicial review. It found that the readings had been taken in the entrance hall to the building, not in the applicant's flat, and could not entail a violation of Articles 15 and 18 § 2 of the Constitution; it also noted that the medical expert's report stated only that the applicant had been receiving treatment for insomnia for several years, without indicating the length of or reason for such treatment.

25. On 9 October 1998 the applicant lodged an amparo appeal with the Constitutional Court. Relying on Articles 14 (equality) and 24 (right to a fair hearing) of the Constitution, she complained that the High Court of Justice had not given sufficient reasons in its judgment or assessed the evidence. She also complained under Articles 15 and 18 § 2 of the Constitution of a violation of her rights to life, physical and mental integrity, privacy and the inviolability of the home.

26. In a decision of 29 May 2000, the Constitutional Court declared the amparo appeal admissible and invited the applicant, the representative of state council's office and the Valencia City Council to submit their observations. On the same day, it summoned the parties to a hearing on the merits on 16 May 2001.

27. At the hearing on 16 May 2001, which was attended by all the parties, the applicant repeated her factual and legal submissions, stressing that there had been a violation of her fundamental rights.

28. The Valencia City Council raised a number of preliminary objections. It further submitted that the appeal was confined to the decision of the Valencia High Court of Justice. With regard to the alleged violation of Articles 15 and 18 § 2 of the Constitution, it alleged that there was no evidence of noise levels inside the applicant's home and that the authority concerned should not bear sole responsibility for the noise to which the applicant had allegedly been exposed, as it had very limited means at its disposal to combat it.

29. The representative of state council's office agreed with the applicant that there had been a violation of Articles 15 and 18 § 2 of the Constitution. He argued that the amparo appeal should be regarded as hybrid, since it both accused the Valencia City Council of failing to defend the fundamental rights set out in Articles 15 and 18 of the Constitution and challenged the Valencia High Court of Justice's decision, alleging a violation of Articles 14 and 24 of the Constitution also.

30. As regards the violation of Articles 15 and 18 § 2 of the Constitution, the representative of state council's office said that, in the light of the judgments of the European Court of Human Rights, in particular in the case of *López Ostra v. Spain*, there had been a violation of the applicant's right to the inviolability of her home, as her home environment had been rendered unfit for ordinary everyday living. On the basis of the Court's case-law, he sought a broader definition of the constitutional concept of the "home".

31. As regards noise levels inside the applicant's home, the representative of state council's office considered that the burden of proof had been reversed, as it was clear in the instant case that officials from the City Council had confirmed on a number of occasions that the maximum permitted levels were being exceeded. Consequently, he did not consider it necessary to require such proof from the applicant.

32. In a judgment of 29 May 2001, which was served on 31 May 2001, the Constitutional Court dismissed the appeal after also dismissing the Valencia City Council's preliminary objections. It ruled that the amparo appeal was hybrid in nature, that is to say that it alleged a violation of Articles 15 and 18 § 2 of the Constitution by the Valencia City Council and a breach of Articles 14 and 24 of the Constitution by the Valencia High Court of Justice.

33. As regards the alleged violation of Articles 14 and 24 of the Constitution, the Constitutional Court began by noting that it was not entitled to substitute the High Court's assessment of the evidence with its own. As to the applicant's allegation that the judgment did not contain sufficient reasons, it noted that the High Court's decision could not be regarded as arbitrary or unreasonable. It further observed that the applicant had not identified the decisions on which she relied in alleging discrimination. Thus, there was no evidence of any violation of Articles 14 and 24 of the Constitution.

34. With regard to the alleged violation of Articles 15 (right to life and physical integrity) and 18 § 2 (right to privacy and to the inviolability of the home) of the Constitution, the Constitutional Court referred to the decisions in which the European Court of Human

Rights had held that, in cases of exceptional gravity, repeated damage to the environment could infringe the right to respect for private and family life under Article 8 § 1 of the Convention, even if it did not endanger health. The Constitutional Court held, however:

"... there may only be a violation of Article 15 of the Constitution if the level of acoustic saturation to which a person is exposed as a result of an act or omission of a public authority causes serious and immediate damage to his or her health."

35. The Constitutional Court found that that test had not been satisfied in the case before it and pointed out:

"... even though the appellant maintains that the noise levels to which she was exposed turned her into an insomniac, the only evidence she has adduced is a certificate stating that she was admitted to hospital and saw a doctor, without any indication of the period for which she had been suffering from lack of sleep or the cause thereof...."

36. The Constitutional Court found that the applicant had not established a direct link between the noise and the damage she had sustained.

37. As to the allegation of a violation of Article 18 of the Constitution, the Constitutional Court further found that she had not established the existence of a nuisance in her home that amounted to a violation of the constitutional provision. It stated:

"... the appellant has confined herself to making a general complaint by stating that the origin of the noise was diffuse and not restricted to a single source of production, and that the acoustic saturation resulted from a combination of noises.... on the contrary, her entire case is based on a few sound-level readings taken inside her home which gave disparate results... and do not establish that there has been a violation of the right relied on...."

38. By way of conclusion, the Constitutional Court dismissed the amparo appeal on the following ground:

"Consequently, as regards the alleged violation of the rights relied on the amparo appeal must be dismissed, as the appellant has failed to prove the existence of a genuine effective breach of fundamental rights attributable to the Valencia City Council."

39. That judgment was delivered by the Constitutional Court sitting as a full court. However, two judges expressed concurring opinions. The first said that the judgment restricted the free development of the personality at home. He considered that the conditions that had to be satisfied for there to be a violation of fundamental rights in the case under consideration were unreasonable and he defended the need to speak of a triple layer of constitutional protection, ranging from the right to physical and moral integrity (Article 15 of the Constitution) to an environment that was suitable for personal development (Article 45 § 1 of the Constitution), via the right to privacy in the home (Article 18 § 2 of the Constitution).

40. The second judge pointed out in his concurring opinion that there was a preliminary problem that had not been adequately dealt with, namely the degree to which the relevant authority was required to provide the requested protection. Determining the extent of that obligation was a prerequisite to establishing whether or not there existed a causal link between the authority's failure to act and the alleged violation. The authorities were obliged to exercise their power when the breach of the fundamental rights attained a certain level of gravity.

## II. RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE

### A. The Constitution

41. The relevant provisions of the Constitution read as follows:

Article 10 § 2

"The provisions relating to the fundamental rights and freedoms recognised under the Constitution shall be construed in accordance with the Universal Declaration of Human Rights and the international treaties and agreements which Spain has ratified in that sphere."

Article 15

"Everyone shall have the right to life and to physical and mental integrity...."

Article 18 § 2

"The home shall be inviolable...."

Article 45 § 1

"Everyone shall have the right to enjoy an environment suitable for personal development and the duty to preserve it.

..."

Article 53 § 2

"Every citizen shall be entitled to seek protection of the freedoms and rights recognised in Article 14 and in the first section of Chapter II by bringing an action in the ordinary courts under a procedure designed to ensure priority and expedition and, in appropriate cases, by an appeal (recurso de amparo) to the Constitutional Court..."

### B. The Fundamental Rights (Protection) Act (Law no. 62/1978)

42. Section 6, which was repealed by the Administrative Courts Act of 13 July 1998 (Law no. 29/1998), read as follows:

"... an application for judicial review may be brought in accordance with the procedural rules set out in this section in respect of decisions of the public authorities that are subject to administrative law and liable to affect the exercise of the fundamental rights of the person..."

### C. The Constitutional Court Act

43. The relevant part of Article 44 of the Constitutional Court Act reads:

"1. An amparo appeal for violations of rights and guarantees amenable to constitutional protection... will lie only if:

...

(c) the party relying on the alleged violation formally pleads it in the relevant proceedings after becoming aware of its occurrence."

D. The bylaw on noise and vibrations issued by the Valencia City Council on 28 June 1986

44. The relevant provisions of the bylaw provide:

Article 8 § 1

"Permitted external noise-reception levels shall be determined by reference to the main user of each of the areas marked on the city development plan and shall not exceed:

Maximum reception levels:

...

Multiple family residence:

Daytime (from 8 a.m. to 10 p.m.): 55 dB (A)

Night-time (from 10 p.m. to 8 a.m.): 45 dB (A)

..."

Article 30

"1. Zones that are acoustically saturated by additional causes are areas or places in which the large number of establishments, activity of the people frequenting them and passing traffic expose local residents to high noise levels and cause them serious disturbance.

2. An area may be designated an acoustically saturated zone (ASZ) if, though individual activities are compliant with the levels set out in this bylaw, the level of disturbance due to external noise as referred to in Article 8 is exceeded twice-weekly in consecutive weeks, or three times intermittently over a period of 35 days, and exceeds 20 dB (A)."

E. The expert report

45. The relevant parts of the report drawn up by Mr X, a professor of applied physics, on the sound-level readings taken in the district in which the applicant lived in Valencia read as follows:

"The results obtained from measurements taken by the Valencia University acoustic laboratory over a period of several years in the said area and measurements taken by other bodies showed that ambient noise levels in this area, in particular at nights and weekends (especially between 1 a.m. and 3 a.m.) are extremely high. At these periods in the area concerned the hourly equivalent sound levels (Leq) frequently exceed 70 dB (A) and the maximum corresponding levels exceed 80 dB (A).

As a result, we can say that noise levels in dwellings in this urban area are intolerably high at night-time and, consequently, detrimental to the health and well-being of the residents.

This conclusion is based on the fact that, even with the windows closed (including in the height of summer), indoor noise levels are very high. It should be noted that under the current regulations (building norm NBE-CA-88) the minimum insulation requirement for the frontage of buildings is 30 dB (A). In practice, that figure is never attained and is generally in the region of 15 to 20 dB (A).

Consequently, in these circumstances, night-time noise levels inside the dwellings, for example in bedrooms overlooking the street, can be estimated at in the region of 50 dB (A), with maximum levels reaching approximately 60 dB (A). We would point out that this is a general estimate and is made without the need for specific measurements to be taken inside the dwellings concerned.

We should explain here that the difference between 50 or 60 dB (A) and 30 dB (A) is enormous. Thus, an increase from 30 to 33 dB (A) does not represent a slight increase in noise (as a layman might think) but the doubling in intensity of the corresponding noise. An informed reading of this report is only possible if the meaning of the "decibel" unit used here is correctly understood."

THE LAW

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION EDL 1979/3822

46. The applicant complained of noise and of being disturbed at night by nightclubs near her home. She alleged that the Spanish authorities were responsible and that the resulting onslaught of sound constituted a violation of her right to respect for her home, as guaranteed by Article 8 EDL 1979/3822, which reads as follows:

Article 8 EDL 1979/3822

"1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except as such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the well-being of the country, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others."

A. Submissions of the parties

1. The applicant

47. The applicant complained of inaction on the part of the local authorities in Valencia, in particular the City Council, which had failed to put a stop to the night-time disturbances. She said that the Government had not put forward any explanation for the failure to act.

48. Firstly, although the Valencia City Council was not the direct source of the noise pollution, it had, in the applicant's submission, caused the acoustic saturation by issuing an unlimited number of licences, without taking measures to comply with the law. The applicant



referred to the principles that had been established in the case of *Lopez Ostra v. Spain* EDJ 1994/13609 (judgment of 9 December 1994, Series A no. 303C, § 51), which concerned the effects of pollution outside the home but also the frame of reference for fundamental rights, in particular the home. She added that the municipal bylaw required measurements of noise emissions from external sources to be taken at the front of the building in which the dwelling was located.

49. In her additional observations of 14 September 2004, the applicant observed that the level of the night-time disturbance (from 10 p.m. to 6. 30 p.m.) caused by more than 127 nightclubs infringed the right to health, as indeed was confirmed by the World Health Organisation's guidelines. Unlike the position in the case of *Hatton and Others v. the United Kingdom* [GC] (no. 36022/97, ECHR 2003-VIII), her home was neither within nor adjacent to an area of vital importance, such as an area relevant to a strategic transport or communications infrastructure. She stressed that her home was in an urban area, specifically, a residential one.

## 2. The Government

50. The Government submitted that the noise to which the applicant referred came from private activities and that, consequently, there had not been direct interference by the public authority in the right to the intimacy of the home and to respect for private and family life. They added that the Valencia City Council had taken various steps in order to solve the problem of acoustic pollution in the area in which the applicant lived. These included preparing and approving a comprehensive and stringent municipal bylaw, designating acoustically saturated zones and a policy of imposing penalties, withdrawing licences and prosecuting offenders.

51. Even assuming that the applicant had been exposed from time to time to acoustic pollution and had been able to prove the effect of the noise inside her home, the relevant authorities had already taken sufficient measures to remedy the situation.

52. In addition, the courts had noted in their decisions that the applicant had failed to establish that she had been exposed to noise inside her home emanating from night-time disturbances and that, in any event, Article 8 EDL 1979/3822 protection was restricted to the home and could not apply when the subject matter of the complaint was a nuisance outside the home. The Government accordingly maintained that no interference with the applicant's right to respect for her home could be found.

## B. The Court's assessment

### 1. General principles

53. Article 8 of the Convention EDL 1979/3822 protects the individual's right to respect for his private and family life, his home and his correspondence. A home will usually be the place, the physically defined area, where private and family life develops. The individual has a right to respect for his home, meaning not just the right to the actual physical area, but also to the quiet enjoyment of that area. Breaches of the right to respect of the home are not confined to concrete or physical breaches, such as unauthorised entry into a person's home, but also include those that are not concrete or physical, such as noise, emissions, smells or other forms of interference. A serious breach may result in the breach of a person's right to respect for his home if it prevents him from enjoying the amenities of his home (see *Hatton and Others v. the United Kingdom* cited above, § 96).

54. Thus in the case of *Powell and Rayner v. the United Kingdom* EDJ 1990/12354 (judgment of 21 February 1990, Series A no. 172, § 40), the Court declared Article 8 EDL 1979/3822 applicable because: "In each case, albeit to greatly differing degrees, the quality of the applicant's private life and the scope for enjoying the amenities of his home had been adversely affected by the noise generated by aircraft using Heathrow Airport". In the aforementioned case of *López Ostra v. Spain* EDJ 1994/13609, which concerned noise pollution and a waste-treatment plant, the Court said: "severe environmental pollution may affect individuals' well-being and prevent them from enjoying their homes in such a way as to affect their private and family life adversely, without, however, seriously endangering their health". In the case of *Guerra and Others v. Italy* EDJ 1998/2076 (judgment of 19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I, § 57), the Court observed: "The direct effect of the toxic emissions on the applicants' right to respect for their private and family life means that Article 8 is applicable". Lastly, in the case of *Surugiu v. Romania* (no. 48995/99, 20 April 2004), which concerned various acts of harassment by third parties who entered the applicant's yard and dumped several cartloads of manure in front of the door and under the windows of the house, the Court found that the acts constituted repeated interference by third parties with the applicant's right to respect for his home and that Article 8 of the Convention was applicable.

55. Although the object of Article 8 EDL 1979/3822 is essentially that of protecting the individual against arbitrary interference by the public authorities, it may involve the authorities' adopting measures designed to secure respect for private life even in the sphere of the relations of individuals between themselves (see, among other authorities, *Stubbings and Others v. the United Kingdom* EDJ 1996/12128, judgment of 22 October 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV, pp. 1505, § 62; and *Surugiu v. Romania*, cited above, § 59). Whether the case is analysed in terms of a positive duty on the State to take reasonable and appropriate measures to secure the applicants' rights under paragraph 1 of Article 8 or in terms of an interference by a public authority to be justified in accordance with paragraph 2, the applicable principles are broadly similar. In both contexts regard must be had to the fair balance that has to be struck between the competing interests of the individual and of the community as a whole. Furthermore, even in relation to the positive obligations flowing from the first paragraph of Article 8, in striking the required balance the aims mentioned in the second paragraph may be of a certain relevance (see *Hatton and Others v. the United Kingdom*, cited above, § 98).

56. The Court reiterates that the Convention is intended to guarantee rights that are "practical and effective", not "theoretical or illusory" (see, among other authorities, *Papamichalopoulos and Others v. Greece* EDJ 1995/11141, judgment of 24 June 1993, Series A no. 260-B, § 42).

### 2. Application of the above principles in the instant case

57. The present case does not concern interference by public authorities with the right to respect for the home, but their failure to take action to put a stop to third-party breaches of the right relied on by the applicant.

58. The Court notes that the applicant lives in an area that is indisputably subject to night-time disturbances; this clearly unsettles the applicant as she goes about her daily life, particularly at weekends. The Court must now determine whether the nuisance caused by the noise attained the minimum level of severity required for it to constitute a violation of Article 8 EDL 1979/3822 .

59. The Government have argued that the domestic courts found that the applicant has failed to establish the noise levels inside her home. The Court considers that it would be unduly formalistic to require such evidence in the instant case, as the City authorities have already designated the area in which the applicant lives an acoustically saturated zone, which, according to the terms of the municipal bylaw of 28 June 1986, means an area in which local residents are exposed to high noise levels which cause them serious disturbance (see paragraph 44 above). In the present case, the fact that the maximum permitted noise levels have been exceeded has been confirmed on a number of occasions by council staff (see paragraphs 14 and 19 above). Consequently, there appears to be no need to require a person from an acoustically saturated zone such as the one in which the applicant lives to adduce evidence of a fact of which the municipal authority is already officially aware. Thus, in the domestic proceedings, the representative of state council's office did not consider it necessary to require the applicant to adduce such evidence (see paragraph 31 above) and added that there had been a reversal of the burden of proof in the present case.

60. In view of its volume -at night and beyond permitted levels- and the fact that it continued over a number of years, the Court finds that there has been a breach of the rights protected by Article 8 EDL 1979/3822 .

61. Although the Valencia City Council has used its powers in this sphere to adopt measures (such as the bylaw concerning noise and vibrations) which should in principle have been adequate to secure respect for the guaranteed rights, it tolerated, and thus contributed to, the repeated flouting of the rules which it itself had established during the period concerned. Regulations to protect guaranteed rights serve little purpose if they are not duly enforced and the Court must reiterate that the Convention is intended to protect effective rights, not illusory ones. The facts show that the applicant suffered a serious infringement of her right to respect for her home as a result of the authorities' failure to take action to deal with the night-time disturbances.

62. In these circumstances, the Court finds that the respondent State has failed to discharge its positive obligation to guarantee the applicant's right to respect for her home and her private life, in breach of Article 8 of the Convention EDL 1979/3822 .

63. There has consequently been a violation of that provision.

## II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION EDL 1979/3822

64. Article 41 of the Convention EDL 1979/3822 provides:

"If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party."

### A. Damage

65. The applicant claimed 879 euros (EUR) on account of pecuniary damage for the double glazing she had had installed in her bedroom. She also claimed EUR 3,005 for non-pecuniary damage.

66. The Government did not make any submissions on this point.

67. The Court notes that the sole ground for awarding the applicant just satisfaction in the instant case is the failure of the relevant authorities to take the action they could reasonably have been expected to take to put a stop to the infringement of the applicant's right to respect for her home. The Court therefore finds that there was a causal link between the violation of the Convention and any pecuniary damage sustained by the applicant. She is therefore entitled to an award under that head. Ruling on an equitable basis, as required by Article 41 EDL 1979/3822 , it finds that the authorities' failure to take action undeniably caused the applicant non-pecuniary damage for which she should also receive compensation and awards her EUR 3,884 for pecuniary and non-pecuniary damage.

### B. Costs and expenses

68. The applicant also claimed EUR 4,952.15 for the costs and expenses she had incurred before the domestic courts and the Court. In her statement of account, she breaks down her claim into (1) the fees and expenses of her representative in the proceedings before the domestic courts (EUR 2,091.53), (2) the fees and expenses of her representative in the proceedings before the European Court of Human Rights (EUR 2,091.53) and (3) the cost of translation services (EUR 769.10).

69. The Government did not make any submissions on this point.

70. Under the Court's case-law, applicants may recover reimbursement of their costs and expenses only in so far as they have been actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum. In the instant case, and having regard to the material before it and the aforementioned criteria, the Court considers it reasonable to award the applicant EUR 4,500.

### C. Default interest

71. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

## FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY

1. Holds that there has been a violation of Article 8 of the EDL 1979/3822
2. Holds

(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 § 2 of the Convention EDL 1979/3822 , the following sums;

- (i) EUR 3,884 (three thousand eight hundred and eighty-four euros) for pecuniary and non-pecuniary damage;
- (ii) EUR 4,500 (four thousand five hundred euros) in respect of costs and expenses;
- (b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

3. Dismisses the remainder of the claim for just satisfaction.

Done in French and notified in writing on 16 November 2004, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Michael O'Boyle Nicolas Bratza

Registrar President

VERSION OFICIAL EN FRANCÉS

## SENTENCIA

AFFAIRE MORENO GÓMEZ c. ESPAGNE

(Requête no 4143/02)

ARRÊT

STRASBOURG

16 novembre 2004

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Moreno Gómez c. Espagne,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de:

Sir Nicolas Bratza, président,

MM. M. Pellonpää,

J. Casadevall,

S. Pavlovschi,

J. Borrego Borrego,

Mmes E. Fura-Sandström,

L. Mijović, juges,

et de M. M. O'Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 juin 2004 et 26 octobre 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

### PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4143/02) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Pilar Moreno Gómez ("la requérante"), a saisi la Cour le 22 novembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention").

2. La requérante est représentée par Me Andrés Morey Navarro, avocat à Valence. Le gouvernement espagnol ("le Gouvernement") est représenté par son agent, M. Ignacio Blasco Lozano, agent du Gouvernement et chef du service juridique des droits de l'homme du ministère de la Justice.

3. La requérante alléguait une atteinte au droit au respect de son domicile et invoquait l'article 8 de la Convention.

4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 29 juin 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.

6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

7. Le 14 septembre 2004, la requérante a soumis des commentaires écrits sur les observations du Gouvernement et ses prétentions au titre de la satisfaction équitable, mais non le Gouvernement.

### EN FAIT

#### I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

8. La requérante est née en 1948 et réside à Valence.

A. La genèse de l'affaire

9. Depuis 1970, la requérante habite un appartement dans une zone résidentielle de la commune de Valence.

10. A partir de 1974, la mairie de Valence a autorisé l'ouverture, à proximité de son logement, de boîtes de nuit tels que bars, pubs et discothèques, qui ont rendu impossible le repos des personnes habitant dans le secteur.

11. Avant 1980, des voisins avaient déjà protesté en raison des dégradations et des bruits auxquels ils étaient confrontés dans ce quartier.

12. Compte tenu des problèmes engendrés par le bruit, la mairie de Valence décida, le 22 décembre 1983, de ne plus autoriser l'ouverture de boîtes de nuit dans le secteur. Cependant, cette décision resta sans effet et de nouvelles licences furent octroyées.

13. En 1993, la mairie en question sollicita une expertise, laquelle établit que les niveaux sonores étaient inadmissibles et dépassaient les limites permises; les samedis à 3 h 35, le niveau de bruit excédait ainsi les 100 dBA Leq (décibels), puisqu'il était compris entre 101 et 115,9 dBA Leq.

14. Dans un rapport du 31 janvier 1995, la police autonome informa la mairie de Valence que les locaux musicaux situés dans le secteur habité par la requérante ne respectaient pas systématiquement les horaires de clôture. Elle signala qu'elle avait pu constater que les plaintes des voisins étaient fondées.

15. Le 28 juin 1996, la mairie approuva un nouvel arrêté municipal sur les bruits et les vibrations, publié le 23 juillet 1996 au journal officiel de la province de Valence. Selon l'article 8 de cet arrêté, dans une zone résidentielle multifamiliale comme celle où vit l'intéressée, l'environnement extérieur ne doit pas dépasser les niveaux acoustiques de 45 dBA Leq entre 22 heures et 8 heures. De même, l'article 30 de l'arrêté définit comme étant des zones acoustiquement saturées celles qui subissent un impact sonore élevé en raison de l'existence de nombreux établissements, de l'activité des personnes qui les fréquentent et du bruit engendré par les véhicules transitant par ces zones, éléments qui constituent une importante source d'agression pour les habitants.

16. Enfin, l'arrêté fixe les conditions auxquelles il est possible de déclarer une zone "acoustiquement saturée" (zona acústicamente saturada) et indique les effets d'une telle déclaration, notamment l'interdiction de lancer de nouvelles activités entraînant une telle saturation (boîtes de nuit, discothèques).

17. Par une décision de la mairie de Valence du 27 décembre 1996, rendue en séance plénière et publiée le 27 janvier 1997 au journal officiel de la province de Valence, le quartier fut déclaré zone acoustique saturée.

18. Toutefois, le 30 janvier 1997, la mairie octroya une autorisation d'ouvrir une discothèque dans l'immeuble habité par la requérante. Plus tard, cette licence fut annulée par un arrêt du Tribunal suprême du 17 octobre 2001.

19. Dans le cadre du dossier de déclaration de zone acoustique saturée, la mairie procéda à plusieurs contrôles sonométriques, la pollution acoustique étant surveillée dans ce secteur. Dans tous les rapports, le service du laboratoire municipal signala que les niveaux de perturbation sonore étaient supérieurs aux limites prévues dans l'arrêté municipal.

#### B. Les procédures

20. La requérante était exaspérée par cette situation qui l'empêchait de dormir et de se reposer, lui causait des insomnies ainsi que de sérieux problèmes de santé. Le 21 août 1997, elle présenta une réclamation préalable auprès de la mairie de Valence, en se fondant sur les articles 15 (droit à la vie et à l'intégrité physique) et 18 § 2 (droit à l'intimité et à l'inviolabilité du domicile) de la Constitution. Elle sollicita en outre 3 907 euros (650 000 pesetas) pour les dommages subis et le coût de l'installation d'un double vitrage.

21. Face au silence de l'administration et conformément à la loi no 62/1978 sur la protection des droits fondamentaux, l'intéressée présenta le 25 novembre 1997 un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal supérieur de justice de Valence, invoquant la violation des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution.

22. Le 2 octobre 1997, la mairie de Valence déposa ses observations écrites, dans lesquelles elle signalait le caractère prématuré du recours, notant qu'elle pouvait encore résoudre le problème et demandant que le recours fût déclaré irrecevable. Par une décision du 27 octobre 1997, cette exception d'irrecevabilité fut rejetée.

23. Le 11 décembre 1997, le ministère public présenta ses arguments et se prononça en faveur de la requérante; il estimait qu'il y avait eu violation des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution et que les dommages et intérêts réclamés par l'intéressée étaient justifiés.

24. Par un arrêt contradictoire du 21 juillet 1998, rendu après la tenue d'une audience publique, le Tribunal supérieur de justice de Valence repoussa la demande de la requérante, en considérant que les éléments relevés, non pas au domicile de celle-ci mais dans le hall d'entrée de l'immeuble, ne pouvaient emporter la violation des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution, et que l'expertise médicale mentionnait seulement que l'intéressée avait suivi un traitement contre l'insomnie pendant plusieurs années, sans préciser la durée ni la raison de ce traitement.

25. Le 9 octobre 1998, la requérante forma contre cette décision un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Invoquant d'une part les articles 14 (égalité) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, elle dénonçait le manque de motivation de l'arrêt et l'appréciation des preuves faite dans celui-ci. Se fondant d'autre part sur les articles 15 et 18 § 2 de la Constitution, elle se plaignait de la violation du droit à la vie, à l'intégrité physique et morale, à l'intimité personnelle et à l'inviolabilité du domicile.

26. Par une décision du 29 mai 2000, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d'amparo recevable et invita l'intéressée, le ministère public ainsi que la mairie de Valence à présenter leurs observations. Le jour même, le Tribunal constitutionnel convoqua les parties à la procédure au fond pour le 16 mai 2001.

27. Lors de l'audience du 16 mai 2001, à laquelle comparurent toutes les parties, la requérante réitéra les faits et moyens invoqués dans ses demandes précédentes, insistant sur la violation de ses droits fondamentaux.

28. La mairie de Valence souleva à titre préliminaire plusieurs exceptions d'irrecevabilité. De plus, elle estima qu'il s'agissait d'un recours attaquant uniquement la décision du Tribunal supérieur de justice de Valence. S'agissant de la violation alléguée des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution, la mairie alléguait tout d'abord que les preuves concernant les niveaux sonores à l'intérieur du domicile de

l'intéressée faisaient défaut et, ensuite, que les bruits prétendument subis n'étaient pas imputables uniquement à l'administration mise en cause, celle-ci ayant des moyens d'action très limités face à l'invasion sonore.

29. Le ministère public partageait le point de vue de la requérante concernant la violation des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution. Il estimait que le recours d'amparo devait être qualifié de "mixte": d'une part, il attaquait la mairie de Valence pour sa passivité dans la défense des droits fondamentaux énoncés aux articles 15 et 18 de la Constitution; d'autre part, il contestait la décision du Tribunal supérieur de justice de Valence, invoquant aussi la violation des articles 14 et 24 de la Constitution.

30. Sur la violation des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution, le ministère public considérait qu'en l'espèce, à la lumière notamment des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme et en particulier l'affaire López Ostra c. Espagne, il y avait eu violation du droit à l'inviolabilité du domicile dans la mesure où l'environnement dans lequel vivait la requérante dans son domicile était impropre à la vie quotidienne. Sur la base de la jurisprudence de la Cour, le ministère public sollicitait l'élargissement du concept constitutionnel de "domicile".

31. En outre, pour ce qui était des bruits à l'intérieur du domicile de la requérante, le ministère public estimait qu'il y avait eu inversion de la charge de la preuve vu qu'en l'espèce le dépassement des niveaux maximums de bruits avait été vérifié à plusieurs reprises par les services municipaux. En conséquence, il ne jugeait pas nécessaire d'exiger de la requérante cette preuve.

32. Par un arrêt du 29 mai 2001, notifié le 31 mai 2001, la haute juridiction rejeta le recours après avoir repoussé les exceptions d'irrecevabilité invoquées par la mairie de Valence. Elle estimait être en face d'un recours d'amparo de caractère "mixte", c'est-à-dire formulé contre la mairie de Valence pour violation des articles 15 et 18 § 2 de la Constitution, et contre l'arrêt du Tribunal supérieur de justice de Valence pour atteinte aux articles 14 et 24 de la Constitution.

33. Pour ce qui est de la violation des articles 14 et 24 de la Constitution, la haute juridiction rappela tout d'abord qu'il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation des preuves à celle opérée par les organes juridictionnels. Concernant le défaut de motivation allégué par la requérante, elle notait que la décision rendue par le Tribunal supérieur de justice de Valence ne pouvait être considérée comme entachée d'arbitraire ou comme déraisonnable. Par ailleurs, elle constatait que l'intéressée n'avait pas précisé sur quelles décisions elle fondait la prétendue discrimination. Ainsi, aucune violation des articles 14 et 24 de la Constitution ne pouvait être décelée.

34. Pour ce qui est de la violation des articles 15 (droit à la vie et à l'intégrité physique) et 18 § 2 (droit à l'intimité et à l'inviolabilité du domicile) de la Constitution, la haute juridiction se référait à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon laquelle, dans les cas de gravité exceptionnelle, plusieurs atteintes à l'environnement, même sans danger pour la santé des personnes, peuvent porter atteinte au droit au respect de la vie privé et familiale, selon l'article 8 § 1 de la Convention. Le Tribunal constitutionnel estimait cependant que:

"(...) il ne peut y avoir violation de l'article 15 de la Constitution que si le niveau de saturation acoustique subi par une personne, comme conséquence d'une action ou d'une omission des pouvoirs publics, nuit gravement et immédiatement à sa santé."

35. La haute juridiction considérait que tel n'était pas le cas en l'occurrence et signalait que:

"(...) même si l'intéressée soutient que le niveau sonore qu'elle a subi l'a rendue insomniaque, elle n'a déposé au dossier qu'un simple certificat d'hospitalisation et de consultation dans lequel ne figuraient ni la durée de ses troubles du sommeil ni la cause de ceux-ci. (...)"

36. Selon la haute juridiction, la requérante n'avait pas prouvé l'existence d'un lien direct entre le bruit et le dommage subi.

37. Quant à l'allégation de violation de l'article 18 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel estimait que l'intéressée n'avait pas non plus démontré l'existence d'une nuisance au sein de son domicile emportant violation de la disposition constitutionnelle. D'après la haute juridiction:

"(...) l'intéressée s'est bornée à se plaindre de façon générale en signalant que le bruit avait une origine diffuse, non limitée à une seule source de production, et que la saturation acoustique était le résultat d'une accumulation de bruits. (...) Au contraire, toute son argumentation est basée sur quelques contrôles sonométriques réalisés à l'intérieur de son domicile, lesquels contrôles ont donné des résultats disparates (...) n'ayant pas permis de conclure à la violation du droit invoqué. (...)"

38. Pour conclure, le Tribunal constitutionnel rejetait la demande d'amparo pour la raison suivante:

"En conséquence, il y a lieu de rejeter l'amparo pour ce qui est de la violation alléguée des droits invoqués, faute pour l'intéressée d'avoir prouvé l'existence d'une atteinte réelle et effective aux droits fondamentaux qui serait imputable à la mairie de Valence."

39. Cet arrêt fut rendu par le Tribunal constitutionnel réuni en séance plénière. Cependant, deux magistrats exprimèrent une opinion concordante. Selon l'un d'eux, l'arrêt limitait le libre épanouissement de la personnalité au domicile; en l'espèce, il considérait que les conditions exigées pour apprécier la violation des droits fondamentaux étaient excessives, et il défendait la nécessité de parler d'une triple échelle de protection constitutionnelle, laquelle devait aller du droit à l'intégrité physique et morale (article 15 de la Constitution) à un environnement adéquat pour l'épanouissement de la personne (article 45 § 1 de la Constitution), en passant par le droit à l'intimité du domicile (article 18 § 2 de la Constitution).

40. Le second magistrat signalait dans son opinion concordante qu'il y avait un problème préalable qui n'avait pas été suffisamment abordé, c'est-à-dire la question de savoir jusqu'à quel point l'administration requise est obligée de dispenser la protection sollicitée. Cette obligation préalable était la condition nécessaire pour admettre ou nier l'existence d'un lien de causalité entre l'inactivité de l'administration et la violation alléguée. Ce pouvoir de l'administration devenait obligatoire quand la lésion des droits fondamentaux atteignait un certain niveau de gravité.

## II. LE DROIT INTERNE ET LA PRATIQUE PERTINENTS

### A. La Constitution

41. Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent comme suit:

Article 10 § 2

"Les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnus par la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l'Espagne."

Article 15

"Tous ont droit à la vie et à l'intégrité physique et morale (...)"

Article 18 § 2

"Le domicile est inviolable. (...)"

Article 45 § 1

"Tous ont le droit de jouir d'un environnement approprié pour développer leur personnalité et le devoir de le conserver.

(...)"

Article 53 § 2

"Tout citoyen peut demander la protection des libertés et des droits reconnus à l'article 14 et à la section première du chapitre II devant les tribunaux ordinaires par une action fondée sur les principes de priorité et de la procédure sommaire et, le cas échéant, par le recours individuel de protection devant le Tribunal constitutionnel. (...)"

B. La loi no 62/1978 de protection des droits fondamentaux

42. L'article 6, qui a été abrogé par la loi no 29/1998 du 13 juillet 1998,

relative à la juridiction contentieuse-administrative, se lisait comme suit:

"Contre les actes de l'administration publique qui sont soumis au droit administratif et qui pourraient affecter l'exercice des droits fondamentaux de la personne, (...) un recours contentieux-administratif peut être formé conformément aux règles de procédure établies dans la présente section (...)"

C. La loi organique du Tribunal constitutionnel

43. L'article 44 de cette loi, dans sa partie pertinente, se lit comme suit:

"1. Les violations des droits et garanties susceptibles de protection constitutionnelle (...) ne pourront faire l'objet du recours d'amparo que:

(...)

c) si la violation alléguée a été invoquée formellement lors de la procédure en cause, une fois la violation produite et connue."

D. L'arrêté municipal de la mairie de Valence relatif aux bruits et vibrations (du 28 juin 1986)

44. Les dispositions pertinentes de cet arrêté sont ainsi énoncées:

Article 8 § 1

"Dans l'environnement extérieur, il est interdit de dépasser les niveaux de réception sonore qui, en fonction de l'usage dominant de chacune des zones signalées sur le plan d'aménagement urbain, s'établissent comme suit:

Niveaux de réception extrêmes:

(...)

Résidence multifamiliale:

Jour (de 8 heures à 22 heures): 55 dB (A)

Nuit (de 22 heures à 8 heures): 45 dB (A)

(...)"

Article 30

"1. Sont appelées zones acoustiques saturées par effets supplémentaires les zones ou lieux de la commune qui subissent un impact sonore élevé en raison de l'existence de nombreux établissements (...) de l'activité des personnes qui les fréquentent et du bruit engendré par les véhicules, transitant par ces zones, éléments qui constituent une importante source d'agression pour les habitants.

2. Pourront être déclarées zones acoustiques saturées (ZAS) les zones où, même lorsque chaque activité prise individuellement respecte les niveaux fixés dans le présent arrêté, les niveaux de perturbation dus à des bruits de l'environnement extérieur tels que visés à l'article 8 sont dépassés deux fois par semaine de manière consécutive, ou trois fois de manière discontinue en l'espace de 35 jours, et excèdent 20 dB (A)."

E. Rapport d'expertise

45. Les extraits pertinents du rapport du professeur X de physique appliquée relatif à l'étude sonométrique réalisée dans le secteur habité par la requérante à Valence, se lisent comme suit:

"Les résultats obtenus au moyen des mesures effectuées par le laboratoire d'acoustique de l'université de Valence pendant plusieurs années dans ladite zone urbaine, de même que ceux recueillis par d'autres organes, font apparaître que les niveaux de bruit ambiant dans cette zone, en particulier pendant les heures nocturnes le week-end (et surtout entre 1 heure et 3 heures du matin), sont extrêmement

élevés. Dans la zone en question et pendant les périodes susmentionnées, les valeurs horaires des niveaux de bruit équivalents (Leq) dépassent fréquemment 70 dB (A), et les niveaux maximums correspondants excèdent 80 dB (A).

Comme conséquence de cette situation, on peut affirmer que les niveaux de bruit à l'intérieur des logements situés dans cette zone urbaine sont intolérablement élevés pendant les heures nocturnes et, par conséquent, qu'ils ont une répercussion négative sur la santé et le bien-être des habitants.

Cette conclusion repose sur le fait que, même en maintenant les fenêtres des logements fermées (y compris en plein été), les niveaux sonores à l'intérieur sont très élevés. Il faut tenir compte de ce que, selon la réglementation en vigueur (norme du bâtiment NBE-CA-88), l'exigence d'isolation minimale des façades est de 30 dB (A). Nous constatons que dans la pratique cette valeur n'est jamais atteinte, mais que l'isolation réelle d'une façade est généralement de l'ordre de 15 à 20 dB (A).

En conséquence, dans les conditions susmentionnées, on peut estimer que les niveaux sonores pendant la nuit, à l'intérieur des logements, par exemple dans une chambre située du côté de la façade, sont de l'ordre de 50 dB (A), avec des niveaux maximums d'environ 60 dB (A). Nous signalons que cette estimation est de nature générale et qu'elle peut être formulée sans qu'il soit nécessaire de réaliser des mesures spécifiques à l'intérieur des logements concernés.

Il semble opportun de préciser ici que la différence entre 50 ou 60 dB (A) et 30 dB (A) est énorme. Ainsi, lorsque l'on passe de 30 à 33 dB (A), il ne s'agit pas d'"un peu plus" de bruit (comme pourrait le penser une personne non avertie), mais cela représente le double de l'intensité du bruit correspondant. L'interprétation correcte de ce rapport n'est possible que si l'on comprend bien la signification de l'unité "décibel" qui a été utilisée ici."

## EN DROIT

### I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

46. La requérante se plaint des bruits et des incidents de tapage nocturne provoqués par les boîtes de nuit installées à proximité de son domicile; elle en impute la responsabilité aux autorités espagnoles et soutient que l'invasion sonore qui en découle porte atteinte au droit au respect de son domicile qui est garanti par l'article 8 et se lit comme suit:

#### Article 8

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

#### A. Argumentation des parties

##### 1. La requérante

47. La requérante se plaint de la passivité des autorités locales de Valence, notamment de la mairie, laquelle n'aurait pas mis fin aux incidents de tapage nocturne. Le gouvernement n'aurait apporté aucun élément de réponse relatif à cette passivité.

48. Tout d'abord, bien que la mairie de Valence ne soit pas l'auteur direct de la pollution sonore, elle serait, d'après la requérante, la cause de cette saturation acoustique du fait qu'elle a délivré des licences de façon illimitée, sans prendre de mesures pour se conformer à la loi. La requérante rappelle ensuite la jurisprudence dans l'affaire Lopez Ostra c. Espagne (arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303C, § 51) par rapport aux incidences de la pollution à l'extérieur du domicile mais concernant aussi le cadre des droits fondamentaux, notamment du domicile. De plus, conformément à l'arrêté municipal, les bruits provenant d'une source extérieure doivent être mesurés au niveau de la façade de l'immeuble du logement mis en cause.

49. Dans ses observations complémentaires du 14 septembre 2004, la requérante relève le fait que le niveau du tapage nocturne (de 10 heures du soir jusqu'à 6 h. 30 du matin), occasionné par plus de 127 boîtes de nuit porte atteinte au droit à la santé, comme d'ailleurs le signale l'Organisation Mondiale de la Santé. A différence de l'affaire Hatton et autres c. Royaume Uni ([GC], no 36022/97, CEDH 2003-VIII), son domicile ne serait ni près ni situé dans une zone importante, par exemple une zone qui jouerait un rôle dans une infrastructure stratégique pour le transport ou les communications. Elle insiste sur le fait que son domicile se trouve dans une zone urbaine et notamment résidentielle.

##### 2. Le Gouvernement

50. Le Gouvernement considère que les bruits auxquels la requérante se réfère proviennent d'activités privées et que, partant, il n'y a pas d'ingérence directe du pouvoir public dans le droit à l'intimité du domicile et à la vie privée et familiale. Il relève, d'ailleurs, que la mairie de Valence a effectué certaines démarches afin de corriger le problème de pollution acoustique dans la zone habitée par la requérante telles que l'élaboration et l'approbation d'un arrêté municipal complet et rigoureux, la déclaration de zone acoustiquement saturée ainsi que l'application de sanctions, révocations de licence et condamnations pénales.

51. A supposer même que la requérante ait subi, plus ou moins occasionnellement, des niveaux de pollution acoustique et ait pu prouver l'incidence de ces bruits dans le cadre de son domicile, les autorités compétentes auraient déjà adopté des mesures suffisantes pour corriger cette situation.

52. D'ailleurs, les juridictions, dans leurs décisions judiciaires, auraient constaté que la requérante n'avait pas prouvé qu'elle subissait des bruits à l'intérieur de son domicile provenant du tapage nocturne et qu'en tout état de cause, la protection de l'article 8 se limitait au domicile et ne pouvait trouver application lorsqu'une nuisance hors du domicile était en cause. Dès lors, pour le Gouvernement, aucune ingérence ne peut être constatée dans le droit de la requérante au respect de son domicile.

## B. Appréciation de la Cour

### 1. Principes généraux

53. L'article 8 de la Convention protège le droit de l'individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le domicile est normalement le lieu, l'espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L'individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Des atteintes au droit au respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l'entrée dans le domicile d'une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences. Si les atteintes sont graves, elles peuvent priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu'elles l'empêchent de jouir de son domicile (voir Hatton et autres c. Royaume Uni, précité, § 96).

54. Ainsi la Cour a déclaré applicable l'article 8 dans l'affaire Powell et Rayner c. Royaume-Uni (arrêt du 21 février 1990, série A no 172, § 40), car "le bruit des avions de l'aéroport de Heathrow avait diminué la qualité de la vie privée et les agréments du foyer (de chacun) des requérants". Dans l'affaire López Ostra c. Espagne (précité) concernant la pollution par les bruits et les odeurs d'une station d'épuration, la Cour a estimé que "des atteintes graves à l'environnement peuvent affecter le bien-être d'une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l'intéressée". Dans l'affaire Guerra et autres c. Italie (arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 57), la Cour a observé que "l'incidence directe des émissions (de substances) nocives sur le droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale permettait de conclure à l'applicabilité de l'article 8". Finalement, dans l'affaire Surugiu c. Roumanie (no 48995/99, 20 avril 2004) relative à diverses entraves, dont l'entrée de tierces personnes dans la cour de la maison du requérant et le déversement par ces personnes de plusieurs charrettes de fumier devant la porte et sous les fenêtres de la maison, la Cour a estimé que ces entraves constituaient des ingérences répétées dans l'exercice, par le requérant, de son droit au respect de son domicile et a conclu à l'applicabilité de l'article 8 de la Convention.

55. Si l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut aussi impliquer l'adoption par ceux-ci de mesures visant au respect des droits garantis par cet article jusque dans les relations des individus entre eux (voir parmi d'autres, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp.1505, § 62; Surugiu c. Roumanie, précité, § 59). Que l'on aborde l'affaire sous l'angle d'une obligation positive, à la charge de l'Etat, d'adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits que les requérants puisent dans le paragraphe 1 de l'article 8, ou sous celui d'une ingérence d'une autorité publique à justifier sous l'angle du paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. En outre, même pour les obligations positives résultant du paragraphe 1, les objectifs énumérés au paragraphe 2 peuvent jouer un certain rôle dans la recherche de l'équilibre voulu (voir Hatton et autres c. Royaume Uni, précité, § 98).

56. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la Convention vise à protéger des "droits concrets et effectifs", et non "théoriques ou illusoire", (voir, parmi d'autres, Papamichalopoulos et autres c. Grèce, arrêt du 24 juin 1993, série A no 260-B, § 42).

### 2. Application en l'espèce

57. La présente affaire ne porte pas sur une ingérence des autorités publiques dans l'exercice du droit au respect du domicile, mais elle concerne l'inactivité des autorités pour faire cesser les atteintes, causées par de tierces personnes, au droit invoqué par la requérante.

58. La Cour constate que la requérante habite dans une zone dans laquelle le tapage nocturne est indéniable, ce qui de toute évidence provoque des perturbations dans la vie quotidienne de la requérante, surtout le week-end. Il faut examiner maintenant si les nuisances sonores ont dépassé le seuil minimum de gravité pour constituer une violation de l'article 8.

59. Le Gouvernement relève que les juridictions internes avaient constaté que la requérante n'avait pas prouvé l'intensité des bruits à l'intérieur de son domicile. Pour la Cour, l'exigence d'une telle preuve, dans le cas d'espèce, est trop formaliste puisque les autorités municipales avaient déjà qualifié la zone où la requérante habite de zone acoustiquement saturée, à savoir, selon les termes de l'arrêté municipal du 28 juin 1986, une zone qui subit un impact sonore élevé qui constitue une source d'agression importante pour ses habitants (paragraphe 44 ci-dessus). En l'occurrence, le dépassement des niveaux maximums de bruits a été vérifié à plusieurs reprises par les services municipaux (paragraphe 14 et 19 ci-dessus). En conséquence, exiger de quelqu'un qui habite dans une zone acoustiquement saturée, comme celle dans laquelle la requérante habite, la preuve de ce qui est déjà connu et officiel pour l'autorité municipale ne paraît pas nécessaire. Ainsi, dans le cadre de la procédure interne, le ministère public n'a pas estimé nécessaire d'exiger de la requérante ladite preuve (paragraphe 31 ci-dessus) et a considéré qu'en l'espèce, il y avait eu inversion de la charge de la preuve.

60. Compte tenu de l'intensité des nuisances sonores, hors des niveaux autorisés et pendant les heures nocturnes, et du fait que ces nuisances se sont répétées durant plusieurs années, la Cour conclut à l'atteinte aux droits protégés par l'article 8.

61. L'administration municipale de Valence a certes adopté dans l'exercice de ses compétences dans la matière, des mesures, en principe adéquates, visant au respect des droits garantis, telles que l'arrêté relatif aux bruits et vibrations. Mais pendant la période concernée, l'administration mise en cause a toléré l'inobservation réitérée de la réglementation qu'elle-même avait établie et y a aussi contribué. Une réglementation pour protéger des droits garantis serait une mesure illusoire si elle n'est pas observée de façon constante et la Cour doit rappeler que la Convention vise à protéger des droits effectifs et non illusoire ou théoriques. Les faits montrent que la requérante a subi une atteinte grave à son droit au respect du domicile en raison de la passivité de l'administration face au tapage nocturne.

62. Dans ces circonstances, la Cour estime que l'Etat défendeur a failli à son obligation positive de garantir le droit de la requérante au respect de son domicile et de sa vie privée, au mépris de l'article 8 de la Convention.



63. Par conséquent, il y a eu violation de cette disposition.

## II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

64. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

"Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable."

### A. Dommage

65. La requérante sollicite d'abord une somme au titre du dommage matériel, pour le système de double vitrage installé dans sa chambre, et réclame un montant de 879 euros (EUR). En outre, au titre du préjudice moral, elle demande une somme de 3 005 EUR.

66. Le Gouvernement ne s'est pas prononcé.

67. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que les autorités compétentes n'ont pas déployé les efforts auxquels on pouvait normalement s'attendre pour faire cesser les atteintes au droit de la requérante au respect de son domicile. La Cour aperçoit donc un lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir; il y a donc lieu d'octroyer cet aspect de ses prétentions. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle considère que ceci a causé à la requérante un tort moral certain, en plus du dommage matériel, justifiant l'octroi d'une indemnité, et alloue à cette dernière 3 884 EUR au titre du préjudice moral et matériel.

### B. Frais et dépens

68. La requérante demande également 4 952,15 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Dans ses relevés de frais, elle ventile sa demande comme suit: honoraires et frais 1) de son représentant auprès des juridictions internes (2 091,53 EUR), 2) de son représentant auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme (2 091,53 EUR) et 3) pour des services de traduction (769,10 EUR).

69. Le Gouvernement ne s'est pas prononcé.

70. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, et compte tenu des éléments en sa possession ainsi que des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 500 EUR et l'accorde à la requérante.

### C. Intérêts moratoires

71. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention;

2. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes:

i. 3 884 EUR (trois mille huit cent quatre-vingt-quatre euros) pour dommage matériel et moral;

ii. 4 500 EUR (quatre mille cinq cent euros) pour frais et dépens;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants sont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2004, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O'Boyle Nicolas Bratza

Greffier Président